



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO QUINTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Edificio Javier Alzamora Valdez Av. Abancay S/N 15° Piso Cercado De Lima

EXPEDIENTE : 02329-2020-0-1801-JR-CA-15
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
DEMANDANTE : DHMONT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO

**Lima, siete de noviembre de
dos mil veintitrés. -**

Visto el presente expediente principal, conjuntamente con el expediente administrativo que obra en cuadernillo separado; los autos se encuentran en estado de expedir sentencia, se procede a resolver en atención a los siguientes considerandos:

I.- PARTE EXPOSITIVA:

Resulta de autos que **DHMONT SAC CONTRATISTAS GENERALES**, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA** sobre Nulidad de Resolución Administrativa.

PRETENSION PRINCIPAL:

- Determinar si corresponde declarar la **Nulidad de la Resolución Gerencial N° 1216-2019-MML-GFC de fecha 29 de noviembre de 2019.**

PRETENSIONES ACCESORIAS:

- Determinar si corresponde declarar la **Nulidad de la Resolución de Subgerencia N° 3874-2018-MML-GFC-SOF de fecha 28 de diciembre de 2018.**
- Determinar si corresponde declarar la **Nulidad de la Resolución de Sanción Administrativa N° 07611-2018-MML-GFC-SOF de fecha 03 de septiembre de 2018, como consecuencia de ello, se declare que no incurrió en infracción administrativa.**

ANTECEDENTES:

Los argumentos de la parte demandante en su escrito de demanda giran en torno a:

- Menciona que **DHMONT SAC CONTRATISTAS GENERALES** es una empresa dedicada a la construcción de inmuebles, es así que con fecha 10 de marzo de 2016, la recurrente adquirió un terreno para la ejecución del proyecto inmobiliario "TORRES LOS CIPRESES" ubicado en al Av. Luis Braille N° 1368-1394, Cercado de Lima.

- Con el fin de mejorar el ornato, la recurrente solicitó licencia para el proyecto de recuperación y/ construcción en áreas verdes ubicados en los exteriores del proyecto inmobiliario “TORRES LOS CIPRESES”, solicitud que fue declarada improcedente mencionando la administración que el pedido debe sujetarse a las normas legales que regulan el Régimen de Propiedad Exclusiva, debido que no son áreas de uso público. Sin embargo, posteriormente la administración sancionó a la recurrente, debido a que supuestamente advirtió que se habrían realizados edificaciones sobre áreas verdes de uso público localizados en la misma área del proyecto inmobiliario,
- Que, las actuaciones realizadas dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador vulneran los principios de predictibilidad, legalidad, buena fe y razonabilidad, debido a que la misma municipalidad señaló que las áreas involucradas no constituían área de uso público, por lo que el supuesto típico materia de sanción no se configura.

TRÁMITE DEL PROCESO

Por resolución N° 01 se admitió a trámite la demanda, siendo contestada por el Procurador Público de la **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Por Resolución N° 03 se declaró saneado el proceso ante la existencia de una relación jurídica procesal válida, fijándose los puntos controvertidos y admitiéndose los medios probatorios respectivos, por lo que, los autos se encuentran expeditos para sentenciar.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

PRIMERO: Conforme a lo previsto por el artículo 1° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, la acción contenciosa administrativa contenida en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, por lo que el nuevo diseño establecido por el régimen legal vigente para el Contencioso Administrativo prevé un proceso de plena jurisdicción de modo que la labor del Poder Judicial no se restringe sólo a controlar la legalidad de los actos administrativos, sino también a brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados.

CARGA DE LA PRUEBA

SEGUNDO: Conforme al artículo 197° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. El artículo 196° del Código acotado, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos.

SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL

TERCERO: Habiéndose establecido los puntos controvertidos y para efectos de entrar al análisis de los hechos a luz de la ley aplicable, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales: “(...) *El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso*”¹ (énfasis es nuestro). Del mismo modo, el Guardián de la Constitución en el fundamento cuarto de la Resolución del Expediente N° 00966-2007-AA/TC señala: la

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 03722-2006-AA/TC de fecha 19.07.2006, segundo fundamento.

*Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver. Más aún, en el Expediente N° 07025-2013-AA/TC de reciente da ta, ha establecido adicionalmente, lo que resulta relevante para efectos de elucidar el caso de autos, que la **motivación suficiente**: (...) es un contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, como parte integrante del debido proceso, el que los órganos jurisdiccionales, al momento de dictar sentencia, se pronuncien por aquellos asuntos que forman **parte esencial o medular del conflicto jurídico que se somete a su conocimiento, pues de lo contrario se habría incurrido en un supuesto de motivación insuficiente, que la Constitución prohíbe** (...).*

ANÁLISIS DEL CASO

CUARTO: De la revisión de los actuados administrativos, se advierte que mediante **Resolución de Sanción Administrativa N° 07611-2018-MML-GFC-SOF del 03 de setiembre de 2018**, la administración sancionó a la demandante con una **multa de S/. 12,450.00** soles por la comisión de la infracción tipificada con el **Código N° 07-0509 del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUI) de la Municipalidad Metropolitana de Lima** aprobado por la Ordenanza N° 984-MML (y modificatorias), y descrita como: **“Por realizar excavaciones o edificar cualquier tipo de estructura, vivienda, etc., sobre áreas verdes de uso público”**. Ello en mérito al **Informe Técnico N° 392-2018-MML-GFC-SOF-CVM-MACR del 26 de julio de 2018**, el cual da cuenta que, a la altura de la Av. Luis Braille N°136, 1394 esq. con Prolongación Arica (frente a la Parroquia San Pio X) – Cercado de Lima **se realizó la construcción en áreas verdes de uso público**; lo que motivó la notificación de Cargo N° 0017294-2018.

QUINTO: Respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador que concluyo con la mencionada sanción, se advierte que la demandante señaló que solicitó a la administración autorización para la ejecución de obras en áreas de uso público, la misma que consistía en el mejoramiento del área publica (veredas – áreas verdes) al exterior del proyecto inmobiliario “Torres Los Cipreses” (ubicado en el cruce de la Av. Luis Braile y Jr. Elvira García, en la Unidad Vecinal de Mirones – Cercado de Lima).

SEXTO: Estando a lo alegado por la demandante, el **Informe Final de Instrucción N° 8110-2018/MML-GFC-SOF-CVM** señala lo siguiente: *“Que, según el contenido en el Acta de Fiscalización N° 0017362-2018, de fecha 26.07.18, se constató que en el local ubicado en Av. Luis Braille N° 1368, 1386, 1394 esquina con Prolongación Arica – Cercado de Lima, conducido por razón social DHMONT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, edificó sobre áreas verdes de uso público (...) Que, si bien la Carta N° 435-2018 comunicó al administrado que las áreas solicitadas corresponden como comunes y ni de uso público, la Resolución de Subgerencia de Autorización Urbanas N° 259-2018, de fecha 09.02.18, ha declarado improcedente la solicitud de autorización (...)”*. Siendo así, se concluye que ante las alegaciones de la demandante, la administración sostiene que conforme al Acta de Fiscalización los hechos se encuentran verificados, y que ante la solicitud de autorización del administrado para la ejecución de obras en áreas de uso público se declaró improcedente.

SÉPTIMO: Es pertinente señalar que el administrado ha sostenido durante el procedimiento administrativo sancionador que solicitó autorización para la ejecución de obras de uso público sobre el lugar donde se realizó la inspección ocular por parte de la administración. Sin embargo, de lo actuados en sede administrativa es posible concluir que la administración no identificó con precisión el lugar de inspección, debido a que de la revisión de los planos presentados por el demandante, tomas fotograficas que obran en el expediente administrativo

y de la verificación del Google Maps, el lugar donde se realizó la inspección ocular se encontraría en la esquina de la Av. Luis Braille y Jr. Elvira García y García, lugar donde se realizó el proyecto inmobiliario “Torres Los Cipreses”. Por lo tanto, existe vulneración al **Principio de Verdad Material**, ya que es necesario que **la administración verifique plenamente los hechos que se le atribuye a la demandante, máxime si la demandante ha señalado que para dicha ubicación solicitó autorización a fin de realizar mejoramiento del área pública exterior al edificio multifamiliar “Torres Los Cipreses”, sin embargo, la administración ha señalado en las resoluciones materia de impugnación que el lugar señalado por el demandante es distinto al que es materia del procedimiento administrativo sancionador.**

OCTAVO: Por otro lado, sin perjuicio a lo señalado anteriormente, se advierte que si bien es cierto que la administración no precisó correctamente el lugar inspeccionado, el mismo se trataría de los exteriores del *edificio multifamiliar “Torres Los Cipreses”*, para lo cual la demandante había solicitado permiso de obra para el mejoramiento del área pública. Sin embargo, mediante **Carta N° 435-2018**, esta solicitud fue contestada argumentando la administración que no es factible otorgar autorización porque dichas áreas corresponden a las áreas comunes y no constituye áreas de uso público. Por lo tanto, no corresponde imputarle a la demanda la sanción tipificada en el **Código N° 07-0509 del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUI) de la Municipalidad Metropolitana de Lima**, que sanciona: **“Por realizar excavaciones o edificar cualquier tipo de estructura, vivienda, etc., sobre áreas verdes de uso público”**, ya que la administración habría señalado que las áreas de las cuales se estaban solicitando autorización para obras no constituían áreas de uso público, y que siendo así la resolución que declaró improcedente la solicitud de autorización señala que el predio involucrado se encuentra sujeto al Régimen de propiedad Horizontal o Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, por lo que las áreas involucradas serían áreas comunes.

NOVENO: Que, se evidencia que la administración habría actuado de forma equivocada al resolver la solicitud de autorización presentada por la demandante, toda vez que al declarar improcedente concluyó que las áreas en cuyo lugar se realizarían las obras no son áreas de uso público, sin embargo, al momento de imponer la sanción consideró sobre el mismo lugar que las acciones realizadas por la demandante sí involucrarían áreas de uso público, por lo tanto, indujo a un error a la demandante debido a que consideró primigeniamente que no correspondía autorización por parte de la municipalidad para esa actividad, en consecuencia, estaríamos ante un supuesto de eximente de responsabilidad, esto es, la exculpación del responsable de la infracción, conforme a lo dispuesto por el **artículo 257 de literal e) del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General**, que señala: **“El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal”**, en consecuencia no es posible aplicar la sanción atribuida a la demandante.

CONCLUSIÓN

DÉCIMO: Que, de lo actuado en sede administrativa se advierte que la administración vulneró el principio de motivación y debido procedimiento. Siendo así, se colige que la resolución cuestionada se encuentra incurso en causal de nulidad, prevista en el artículo 10° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo cual la demanda debe estimarse.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 87 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso, de cuyo dispositivo se establece como premisa que **“ lo accesorio sigue la suerte de lo principal”**, siendo que, según el análisis precedente, corresponde estimar la nulidad de la **Nulidad de la Resolución de Subgerencia N° 3874-2018-MML-GFC-SOF y la Resolución de Sanción Administrativa N° 07611-2018-MML-GFC-SOF**. Sin embargo, respecto a que se declare que no incurrió en la infracción administrativa, esta judicatura no puede establecer de plena jurisdicción que la recurrente no incurrió en infracción administrativa, debido a que los hechos no están debidamente determinados, siendo necesario una inspección ocular e informe técnico, que determine entre otras cosas el tipo de

área involucrados en la inspección estando a que la administración tiene posiciones distintas sobre ello.

III.- PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 30° y 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y los artículos 196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la Señora Juez del Décimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación,

RESUELVE:

1. **DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la demanda contenciosa, en consecuencia, se declara de la **NULIDAD** de:
 - Resolución de Subgerencia N° 3874-2018-MML-GFC-SOF
 - Resolución de Subgerencia N° 3874-2018-MML-GFC-SOF
 - Resolución de Sanción Administrativa N° 07611-2018-MML-GFC-SOF.
2. Debiendo la administración tramitar el procedimiento sancionador, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente.
3. **IMPROCEDENTE** respecto a que no incurrió en infracción administrativa.
4. **ARCHÍVESE**, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia.
5. **Notificándose a las partes del proceso.** -